

C.A. de Santiago

Santiago, treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Por sentencia de catorce de marzo de dos mil veinticuatro, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT T-1397-2023, se rechazó la excepción de finiquito y se acogió en todas sus partes la denuncia, declarando que la denunciada incurrió en vulneración de derechos fundamentales de la actora, afectando su derecho a no ser discriminada con ocasión del despido. En virtud de lo anterior, se le condenó al pago de una indemnización equivalente a once remuneraciones; se declaró, además, que el despido fue injustificado, ordenando el pago del recargo del 30% sobre la indemnización por años de servicio y restitución del aporte del empleador al Seguro de Cesantía y se dispuso las medidas adicionales de reparación que se especifican en el resolutivo III.- del fallo del grado.

Contra esta sentencia recurre de nulidad la parte denunciada, fundado en dos causales que deduce de modo subsidiario. En primer lugar, interpone aquella contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, en su hipótesis de infracción de ley, denunciando la contravención del artículo 177 del mismo cuerpo legal en relación con el artículo 2446 del Código Civil. En subsidio, alega la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, es decir, infracción a las reglas de la sana crítica al apreciar la prueba, en especial al principio de la razón suficiente al concluir que el despido de la actora fue discriminatorio.

Solicita que se acoja el recurso y se dicte sentencia de reemplazo que rechace la denuncia en todas sus partes.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su conocimiento en la audiencia del día siete de agosto último, oportunidad en que alegaron los abogados de ambas partes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la causal principal se hace consistir en la infracción del artículo 177 del Código del Trabajo en relación con el artículo 2446 del Código Civil, error que -en su concepto- se comete por el sentenciador al resolver que la acción por denuncia de derechos fundamentales se



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JPMXXREZWSY

encontraría incluida en la reserva hecha por la actora en el finiquito razonando que en este último no se contempló específicamente una renuncia a la acción de tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido por discriminación, lo que genera un requisito de especificidad no establecido por la norma en el artículo 177 que estima transgredido, como tampoco en la jurisprudencia ni doctrina laboral. Liga lo anterior con la circunstancia de que el tenor literal de la reserva de derechos contenida en el finiquito es “*me reservo el derecho a demandar ante tribunales, por; despido injustificado, devolución de los descuentos de la AFC*” e indica que tanto la jurisprudencia como la doctrina, si bien reconocen la eficacia de la reserva de derechos estampadas por los trabajadores en sus finiquitos, han establecido que dichas reservas deben contener un señalamiento expreso de los derechos o acciones reservados.

Manifiesta que en el caso *sublite* de la lectura de la reserva y de las distintas cláusulas del finiquito debe concluirse que las acciones por despido injustificado y descuento de AFC son las que no quedan sujetas al imperio del finiquito, pero no tiene reparo el trabajador por considerar cumplidas todas las demás obligaciones contenidas en la cláusula quinta del documento, como así también el expreso reconocimiento de no haber sido víctima de vulneración de derechos durante la relación laboral o al término de ésta.

Concluye que lo resuelto contradice el sentido y alcance del artículo 177 del Código del Trabajo en relación con el artículo 2446 del Código Civil al exigir un requisito de especificidad no contemplado en el ordenamiento jurídico, infracción que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues llevó al rechazo de la excepción de transacción que deriva del finiquito firmado por la actora.

SEGUNDO: Que de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del inciso primero del artículo 477 del Código del Trabajo, será procedente el recurso de nulidad cuando la sentencia definitiva se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

En términos simples, la causal de nulidad señalada resulta procedente en el evento que el fallo aplique incorrectamente el derecho llamado a regir la cuestión que motiva la controversia y ello puede tener lugar, en primer



término, en los casos de contravención formal de la ley, o sea, aquéllos en que el fallo prescinde de la ley o falla en oposición a su texto expreso. En segundo, en los casos de errónea interpretación de la ley, esto es, cuando la sentencia da al precepto legal un alcance diverso a aquel que debía haberle dado si hubiera aplicado correctamente las normas de interpretación de la ley que se establecen en los artículos 19 a 24 del Código Civil, y por último en los casos en que hay falsa aplicación de la ley, defecto que puede producirse cuando la ley se aplica a un caso no regulado por la norma o cuando la sentencia prescinde de la aplicación de la ley para los casos en que ella se ha dictado.

Asimismo, la causal supone que los hechos fijados en el fallo del tribunal a quo resultan inamovibles, de modo tal que los supuestos de procedencia del recurso deberán referirse única y exclusivamente al derecho aplicable.

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto debe considerarse, en primer término, que en la cláusula quinta del finiquito se dejó consignado, en lo que interesa a lo discutido, que *“el ex trabajador declara que nunca fue ni se sintió hostigado, discriminado, ni afectado en sus derechos fundamentales, ni dañado patrimonial o moralmente por su ex empleador ni por ninguna persona que en ella haya prestado servicios mientras duró su relación laboral. Declara asimismo que en todo momento fue tratado con dignidad y respeto por las personas jurídicas y naturales referidas. Por tanto, en virtud de la declaración formulada precedentemente, renuncia expresamente de manera libre y espontánea, en conocimiento de todos y cada uno de sus derechos, a las acciones que el Código del Trabajo establece en los artículos 486 y 489 respectivamente (...) el ex trabajador y el ex empleador acuerdan que la declaración contenida en los párrafos anteriores de esta cláusula incluye tanto la época de contratación y vigencia, como la de término de la relación, declarando el ex trabajador que está de acuerdo en su totalidad con la causal de término de contrato de trabajo por la que se puso fin a su relación laboral. Como consecuencia de las declaraciones previas, el ex trabajador renuncia expresamente a todo tipo de reclamaciones, denuncias o acciones de naturaleza administrativa, judicial y extrajudicial, tanto de carácter laboral por (...) infracción de derechos*



fundamentales, por represalia y/o discriminación y por despido antisindical o cualquier otro.”

En segundo lugar, también es relevante tener a la vista que en el mismo finiquito se observa la siguiente frase manuscrita: *“me reservo el derecho de demandar ante tribunales por; despido injustificado, devolución de los descuentos de la A.F.C.”*.

Ahora bien, el error de derecho que se atribuye al fallo consiste, en síntesis, en haber exigido al finiquito un requisito de especificidad en cuanto a la renuncia de acciones no contemplado en el ordenamiento jurídico, y en haber extendido la eficacia de la reserva a acciones no expresamente contempladas en ella.

En la tesis del fallo impugnado, dado que en el finiquito no se consideró de manera expresa la renuncia a la acción de tutela incoada, no puede prosperar la excepción, pues el poder liberatorio del finiquito se restringe a aquellas materias en que las partes han concordado expresamente; destacando adicionalmente la poco prolija, confusa y deficiente redacción de la cláusula quinta del finiquito, que contiene la renuncia de acciones y derechos. En una segunda línea de argumentación, la sentencia del grado razona que incluso en el caso que el finiquito hubiere contenido la acción de tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido por concepto de no discriminación, de igual forma la excepción incoada no habría podido prosperar al no ser posible la renuncia de la acción de vulneración de derechos fundamentales a través de la suscripción del finiquito. Ello, dada la naturaleza irrenunciable y jerárquicamente superior de estas garantías que determina la subsistencia de una eventual acción de tutela, sin perjuicio de la procedencia de acuerdos de conciliación o avenimiento debidamente autorizados por un tribunal.

CUARTO: Que sin perjuicio de lo que se expondrá a continuación, resulta apropiado transcribir la preceptiva que regla el conflicto jurídico, contenida en el artículo 177 del Código del Trabajo. Con arreglo al inciso final de esta norma, el poder liberatorio del finiquito se restringirá sólo a aquello en que las partes concuerden expresamente y no se extenderá a los aspectos en que el consentimiento no se forme. Por su parte, el inciso sexto del mismo artículo dispone que el trabajador que haya aceptado la suscripción del



finiquito podrá consignar que se reserva el derecho a accionar judicialmente contra su ex empleador.

QUINTO: Que como puede advertirse de la transcripción literal de los preceptos, la especificidad con que debe ser redactada la renuncia de derechos y acciones contenida en un finiquito es una exigencia legal, si se quiere dotar a tal abdicación de poder liberatorio. De este modo, no se verifica en la sentencia el primer yerro que acusa el recurrente, desde que el mismo ha restringido el poder liberatorio del documento y no lo ha extendido a los aspectos en que el juez entiende-justificadamente- que no se ha formado el consentimiento, tal cual lo exige la norma del inciso segundo del artículo 177 del Código del Trabajo, lo que impone el rechazo de la causal en cuestión, teniendo en especial consideración que en el presente caso lo discutido es una presunta renuncia a cualquier acción por vulneración de derechos fundamentales -de toda naturaleza- durante la vigencia de la relación laboral o con ocasión de su término, implica una acción especialísima sobre derechos que -además de ser de primer orden- supera el vínculo laboral, aunque se haya producido a causa de su ejecución. En tal sentido, se incrementa la exigencia de especificidad que pesa sobre el redactor del documento, quien pudo ser mucho más explícito si su intención era realmente la de transigir sobre ésta específica y excepcional situación.

Lo anterior debe relacionarse con lo que se consigna en la parte final del inciso penúltimo del artículo 495 del Código del Trabajo, que en materia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales impone al juez abstenerse de autorizar cualquier tipo de acuerdo que mantenga indemne la conducta lesiva de derechos fundamentales, norma que refuerza la decisión del grado en orden a no dejar indemne una conducta de despido discriminatorio.

SEXTO: Que, tocante al segundo reproche que se formula a la sentencia, cabe señalar que el legislador en parte alguna exigió que la reserva de derechos del trabajador se refiriera a prestaciones, montos o acciones específicas o determinadas y únicamente consagró la facultad de estampar una “reserva del derecho a accionar judicialmente”. Esta constatación marca un punto de partida relevante en la inteligencia de la norma, en tanto, según el axioma, donde el legislador no ha distinguido no es



lícito al intérprete distinguir, y la verdad es que lo que se concluye de ella, cual es que resulta suficiente una reserva -como se ha denominado- genérica, se condice con otras disposiciones del Código que se refieren al mismo asunto.

En efecto, previo a hacer alusión a esos otros preceptos, existe otra clase de consideraciones extrajurídicas que aunque por cierto no son determinantes, pero que no por ello deben ser desoídas del todo, también conducen a la misma conclusión. Esas consideraciones extrajurídicas dicen relación, principalmente, con el momento y las circunstancias en que se suscribe el finiquito desde la perspectiva del trabajador que formula la reserva, quien pese a no estar ligado ya al empleador porque el contrato de trabajo ha terminado, continúa en muchos casos (no en todos, por cierto) en la misma situación de desigualdad o asimetría que existe durante la relación laboral, debiendo tomar una decisión relevante en un momento que muchas veces puede ser complejo y que supone contar con algún dominio sobre determinadas cuestiones técnicas o jurídicas que el trabajador no tiene por qué conocer con precisión.

SÉPTIMO: Que, ahora bien, de acuerdo a la ley -inciso primero del artículo 171- la extensión del finiquito no es facultativa para quienes fueron parte del contrato de trabajo, sino que constituye una obligación del empleador, quien debe otorgar el finiquito y poner a disposición del trabajador el pago de las sumas de dinero que se indiquen en él dentro de los diez días siguientes a la separación, independiente de la causal de despido o de término de contrato, salvo una situación de excepción que no viene al caso.

En el finiquito, por tanto, no se indican las cuestiones en relación a las cuales hay acuerdo entre empleador y trabajador, sino las que el primero reconoce y se muestra dispuesto a solucionar. Por consiguiente, si el trabajador no está completamente de acuerdo con lo que el empleador le propone puede no firmar el finiquito, en cuyo caso nada recibe, y puede firmarlo por concordar en todo lo que se le presenta, evento en el cual el finiquito gozará de pleno poder liberatorio y en tanto ratificado ante el inspector del trabajo u otras autoridades que señala la ley, goza de mérito ejecutivo para el cobro compulsivo de las sumas de dinero que en él se indican.



Pero sin perjuicio de lo anterior, el legislador reconoce al trabajador la opción de firmar el finiquito reservándose el derecho a accionar judicialmente contra su ex empleador, en cuyo caso se producirán idénticos efectos a los últimos recién señalados, sólo que el poder liberatorio -como se dijo- se restringirá únicamente a aquello en que las partes concuerden de manera expresa y que evidentemente será aquello que el empleador ha reconocido adeudar y ofrecido pagar.

Nada en la regulación de la ley permite afirmar que ésta requiere que la reserva de derechos sea específica; es más, cada vez que la normativa del Código se refiere a ella -artículos 162 inciso octavo, 163 bis N° 5 letra b) y 177 incisos tercero, cuarto (dos veces) y sexto- lo hace en los mismos términos y habla de, precisamente, reserva de derechos, sin más.

Tampoco puede esgrimirse que experimenta perjuicio el empleador con una reserva genérica, puesto que el momento de conocer las pretensiones del trabajador o, visto desde otra perspectiva, de saber en qué el trabajador no está de acuerdo, será cuando ejerza esos derechos reservados en la demanda judicial, en la que por cierto deberán, ahora sí, precisarse.

OCTAVO: Que, siguiendo este orden de consideraciones, al tiempo que no existe esta obligación de especificidad de la reserva, tampoco puede interpretarse esta reserva de manera restrictiva o exigir al trabajador que la formule en términos técnicos o jurídicos si carece de tales conocimientos, encasillando en una calificación jurídica esta manifestación de voluntad de accionar judicialmente, que es lo que postulado por el recurrente.

NOVENO: Que por las razones expresadas en los motivos que anteceden y por no haber incurrido el tribunal *a quo* en error de derecho en la aplicación de los preceptos legales con arreglo a los cuales resolvió la controversia, el recurso de nulidad debe ser declarado sin lugar.

DÉCIMO: Que en subsidio la denunciada dedujo la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, denunciando una infracción manifiesta de las reglas de la sana crítica al momento de valorar la prueba.

Acusa la transgresión del principio de razón suficiente y explica que en el motivo octavo el sentenciador estableció que la denunciante fue despedida 7 días después de volver de un reposo de 135 días, por licencias médicas continuas, siendo esto indiciario de que el despido de la denunciante se funda



en estas licencias, atendida la proximidad temporal entre ambos. Tal conclusión, reclama el impugnante, desconoce lo dispuesto en el artículo 87 del DFL N° 1 del 10 de septiembre de 1996, que establece la forma de poner término a los contratos de profesionales de la educación conforme al artículo 19 S del mismo decreto, los plazos para ello y las indemnizaciones que proceden. En este orden de ideas, postula que la notificación de desvinculación efectuada el día 13 de diciembre encuentra su fundamento en la normativa señalada, y no en una discriminación por el período de licencias médicas finalizado el 6 de diciembre, dado el plazo perentorio con que contaba para ello. Agrega que el sentenciador sustenta esta supuesta discriminación en las continuas licencias de la denunciante y en la proximidad entre el término de la última licencia y su despido, más no se justificó la existencia de ningún acto concreto que diera cuenta de una distinción caprichosa y arbitraria en contra de la demandante más allá de la temporalidad, sin hacerse cargo de los plazos contemplados en la preceptiva citada.

UNDÉCIMO: Que tocante a la causal de invalidación en estudio, de un modo persistente y reiterado se ha venido indicando por esta Corte que busca controlar el *razonamiento probatorio* contenido en la sentencia, con miras a verificar que en esa actividad no se hayan contrariado o vulnerado los parámetros de la lógica, de la técnica, de los conocimientos científicos o de las reglas de experiencia. Expresado en otros términos, de lo que se trata es de fiscalizar que *las razones* vertidas por el juzgador respeten esos lineamientos. Para ese fin, el recurrente ha de ser capaz de demostrar el error, precisando en su impugnación cuáles hechos estarían incorrectamente fijados en el fallo y, sobre todo, la causa de ese error.

Igualmente, para que prospere la causal alegada por el reclamante, es menester que la infracción de las normas sobre valoración de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica, sea manifiesta, esto es evidente, notoria, capaz de ser advertida a simple vista.

Además, la causal exige que el recurso indique qué reglas de la sana crítica se encuentran infringidas y cómo se produce esa trasgresión.

DUODÉCIMO: Que de la lectura del arbitrio es posible constatar que no cumple con los extremos recién señalados, pues si bien denuncia la



vulneración del principio lógico de la razón suficiente, el impugnante no logra articular cuáles son las transgresiones cometidas propiamente al momento de valorar las probanzas, desarrollando la causal en torno a un cuestionamiento del raciocinio empleado por el juzgador para arribar a ciertas conclusiones que le son desfavorables, reproche que evidentemente no logra colmar la causal de invalidación invocada.

Así, en el arbitrio se recrimina, en síntesis, que el fallo no habría tenido en consideración que el fundamento y razón de la fecha del despido se encontraba en el cumplimiento de las exigencias impuestas por el artículo 87 del DFL N° 1 de 10 de septiembre de 1996 y no en una discriminación por salud. Tal argumentación no dice relación con el proceso de ponderación de evidencias, sino con una etapa posterior, pues pretende que los hechos establecidos sean calificados de una cierta manera a la luz del derecho, es decir, que se le atribuyan determinadas consecuencias jurídicas. Tal juicio intelectual, posterior al de la valoración de las probanzas, no puede ser abordado a través de la causal de nulidad incoada.

DÉCIMO TERCERO: Que lo señalado precedentemente impide que la causal deducida subsidiariamente pueda prosperar, al no configurarse los supuestos de la hipótesis de invalidación invocada.

Por las razones anteriores, más lo dispuesto en los artículos 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la parte demandante en contra de la sentencia de uno de marzo de dos mil veinticuatro, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT T-1397-2023, sentencia que, en consecuencia, **no es nula**.

Se previene que la Fiscal Judicial Sra. Troncoso L. concurre a la decisión de rechazar la primera causal sin compartir lo señalado en los motivos sexto, séptimo y octavo, teniendo en consideración que para dar vigencia al inciso final del artículo 177 del Código del Trabajo, en cuanto preceptúa que el poder liberatorio del finiquito se restringe sólo a aquello en que las partes concuerden expresamente y no se extenderá a los aspectos en que el consentimiento no se forme y, de acuerdo al contexto del mismo artículo -que debe servir para ilustrar el sentido de cada una de sus partes- la reserva de derechos del trabajador no puede ser, en caso alguno, de carácter



genérica, debiendo al menos esbozar cuáles son las pretensiones que son reservadas para un eventual ejercicio de acciones judiciales.

Entender lo contrario, en concepto de quién previene, envolvería negar que el finiquito -tal como su nombre lo indica- tiene entre sus objetos ajustar cuentas entre empleador y trabajador y dar un cierre a la relación laboral, operando como una transacción en tanto precave un litigio eventual. Esto no implica que deba exigirse al trabajador el uso de un lenguaje técnico-jurídico, un conocimiento acabado del haz de acciones judiciales de que dispone o una precisión extrema pero sí, al menos, debe dotar a su reserva de un contenido que permita comprender los alcances tanto de ésta como del finiquito respecto del cual se ejerce o, en otras palabras, cuáles son los términos en que se formó su consentimiento y cuáles son los aspectos en que no consintió. Cuestión distinta es que, a posteriori, deducida ya la demanda, el juez del grado califique jurídicamente si los términos en que fueron formulados tanto el finiquito como la reserva involucran o no a las acciones ejercidas en el juicio.


Dicho lo anterior, en el *caso sublite*, la actora manifestó, en un lenguaje coloquial pero de manera expresa y precisa, su intención de reservar las acciones relacionadas con su despido, sin que pueda constreñirse su voluntad por el uso de la expresión “*injustificado*”, privándola de reclamar del carácter discriminatorio que atribuye a su desvinculación por no haber usado un vocabulario jurídico.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la Fiscal Judicial Sra. Macarena Troncoso L.

No firma el ministro señor Jaime Balmaceda, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con feriado legal.

Laboral-Cobranza N°1161-2024.

<div></div> <div><p>Paola Cecilia Díaz Urtubia Ministro(S) Corte de Apelaciones Treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro 11:34 UTC-3</p></div> <div></div>	<div></div> <div><p>Macarena Del Carmen Troncoso López Fiscal Corte de Apelaciones Treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro 11:30 UTC-3</p></div> <div></div>
---	--

Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Suplente Paola Cecilia Díaz U. y Fiscal Judicial Macarena Troncoso L. Santiago, treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JPMXXREZWSY

C.A. de Santiago
Santiago, ocho de enero de dos mil veinticinco.
A folio 17: estese a lo que se resolverá.

Vistos:





Advirtiéndose el error de referencia en la sentencia de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, se procede a rectificar en los siguientes términos:

Donde se señala: "Por las razones anteriores, más lo dispuesto en los artículos 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, se rechaza el recurso de nulidad deducido por la parte demandante",

Debe decir: "Por las razones anteriores, más lo dispuesto en los artículos 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, se rechaza el recurso de nulidad deducido por la parte demandada."

Manténgase inalterado el resto de la sentencia. Esta resolución se considera parte integrante de aquella que se rectifica.

NºLaboral-Cobranza-1161-2024.

<div><div></div><div><div>Jaime Balmaceda Errázuriz Ministro Corte de Apelaciones Ocho de enero de dos mil veinticinco 11:36 UTC-3</div><div></div></div></div>	<div><div></div><div><div>Lidia Virginia Poza Matus Ministro(S) Corte de Apelaciones Ocho de enero de dos mil veinticinco 11:29 UTC-3</div><div></div></div></div>
<div><div></div><div><div>Erika Andrea Villegas Pavlich Ministro(S) Corte de Apelaciones Ocho de enero de dos mil veinticinco 11:30 UTC-3</div><div></div></div></div>	



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VZXXSEPGCC

Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Jaime Balmaceda E. y los Ministros (as) Suplentes Lidia Poza M., Erika Andrea Villegas P. Santiago, ocho de enero de dos mil veinticinco.

En Santiago, a ocho de enero de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VZXXSEPGCC